



CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Comisión Pueblos Andinos, Amazónicos
y Afroperuanos. Ambiente y Ecología

17 AGO. 2018

RECIBIDO

Firma: _____ Hora: _____ Registro N° _____

Reg.024

Carta N° 141-2018/GG/COMEXPERU

Miraflores, 17 de julio de 2018

74322

Señor Congresista
MARCO ANTONIO ARANA ZEGARRA
Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología
Congreso de la República
Presente. -

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
MESA DE PARTES

18 JUL 2018

RECIBIDO

Firma: _____ Hora: 09:20

Ref. : Proyectos de Ley N.º 0592-2016, Proyecto de Ley N.º 2995, 2976, 2956, 2852, 2843, 2821, 3022, 2921, 3014, 858/2017-CR, y Dictamen Sustitutorio recaído en los Proyectos de Ley N.º 2248, 2368, 2417, 2696, 2702, 2805 y 2882/2017-CR que regulan el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con la finalidad de transmitirle la opinión de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú - ComexPerú respecto a los proyectos de ley de la referencia (en adelante, "los Proyectos"), que establecen el marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio nacional.

Como organización comprometida con la promoción del desarrollo del comercio exterior, la defensa del libre mercado y el fomento de la inversión privada, compartimos el espíritu de los Proyectos, en tanto buscan reducir los impactos ambientales producidos por el uso del plástico; una política que, además, va en línea con la tendencia mundial. No obstante, consideramos que esta regulación, tal como ha sido planteada en los Proyectos, no estaría recogiendo todas las particularidades del mercado peruano, por lo que podría restarle eficiencia.



Así, luego de haber analizado las iniciativas legislativas, ComexPerú presenta las siguientes consideraciones que esperamos puedan ser tomadas en cuenta:

1. En líneas generales, los Proyectos no otorgan un plazo razonable para que las empresas formales puedan adecuarse a la nueva normativa. Si bien es cierto que comparten el interés por alinearse con las nuevas regulaciones y a la tendencia mundial de reducir el consumo de plástico (de hecho, muchas ya vienen implementando medidas amigables con el medio ambiente), las empresas deben rediseñar sus estrategias, replantear operaciones y procesos

de producción, venta o distribución, así como evaluar costos; por lo cual es importante prever un plazo adecuado y progresivo para implementar los cambios internos que les permitan, de manera eficiente, atender la nueva normativa.

En el caso específico del sector *retail*, resulta importante tener en consideración que ya existe un *stock* de bolsas plásticas, por lo que conviene implementar un plazo realista que permita implementar la política de sustitución a nivel nacional. No olvidemos que la mayoría de las empresas de este sector (supermercados, tiendas por departamento, tiendas de mejoramiento del hogar, farmacias, entre otras) cuentan con más de cien tiendas en distintos puntos del país. En tal sentido, creemos que un plazo razonable sería de 2 años, pudiéndose disponer la posibilidad de que las empresas vayan cumpliendo con las obligaciones de sustitución, de forma voluntaria, en plazos menores.

2. No existe en nuestro país una política de gestión de residuos sólidos que permita cerrar el círculo a través del reciclaje. La exigencia de sustituir las bolsas plásticas por bolsas biodegradables o compostables no tendrá ningún efecto, pues al no existir un adecuado manejo de estas, dichas bolsas terminarán igualmente en el mar, generando algún tipo de impacto. Cualquier regulación cuyo objeto sea reducir la contaminación ambiental derivada del uso del plástico, debe considerar la implementación de una herramienta adecuada para la gestión de residuos plásticos.
3. Si bien en algunos de los Proyectos se incluye una disposición para implementar un registro de fabricantes, importadores y distribuidores de bolsas plásticas y demás bienes regulados, con la finalidad de recopilar y sistematizar la información y construir una base estadística al respecto, no se está tomando en cuenta que más del 70% de la economía peruana se encuentra en la informalidad, lo que incluye tanto a productores como comercializadores y usuarios de bolsas y envases plásticos. Incluso, el *retail* moderno (al que se dirige la regulación principalmente) solo representa el 17% del mercado. Una prohibición frontal y de muy corto plazo, podría generar un mercado negro que incremente esta informalidad.
4. Dado el contexto en que nos encontramos, más que centrar los esfuerzos en prohibir la producción, comercialización y uso de bolsas y envases plásticos, la regulación debe desarrollar con mayor detalle un plan estratégico para educar, a todo nivel escolar, a los niños y jóvenes e involucrarlos como parte de la solución. Sin un buen programa de concientización y educación en la sociedad, ninguna regulación de este tipo tendrá un impacto positivo.
5. Es de suma importancia que todos los proyectos definan adecuadamente qué es lo que se pretende regular. Existe mucha diferencia en cuanto a composición y costos entre las bolsas de plásticos de polietileno y polipropileno, las bolsas biodegradables, las oxobiodegradables, las de un solo uso, las bolsas reciclables y las reutilizables. Para una mayor certeza, los proyectos deben definir claramente qué material será el promovido.
6. De igual manera, los plazos establecidos para el cambio progresivo deberán computarse desde la vigencia de las normas técnicas que aprueben las características de las bolsas que serán





permitidas, y desde la entrada en vigencia de la ley que se apruebe, puesto que recién con las normas técnicas las empresas tendrán certeza de cómo deberán proceder.

7. Las bolsas biodegradables tienen un costo aproximado cuatro veces mayor a las bolsas plásticas de polietileno y polipropileno. En ese sentido, la ley que finalmente se apruebe no debería imponer al sector privado un cobro específico por el expendio de bolsas. Cobrar a sus clientes por las bolsas o internalizar dicho costo es una decisión que debe tomar la propia empresa en base a sus estrategias de negocio. De igual manera, ninguna normativa pública debe regular los precios en el sector privado, bajo riesgo de ser declarada inconstitucional.
8. En cuanto a las botellas de tereftalato de polietileno (PET), se dispone que las bebidas carbonatadas, gaseosas, aguas, energizantes, rehidratantes y otras bebidas similares deberán obligatoriamente incluir en la cadena productiva material PET reciclado, en al menos 25% de su composición. Al respecto, tenemos varias observaciones puntuales:
 - a. La disposición solo regularía la industria de bebidas, lo que resulta discriminatorio, en tanto existen otras industrias que también utilizan material PET. La normativa debería hacer referencia a todos los envases PET que, sin comprometer su inocuidad y salubridad, puedan incorporar material PET reciclado.
 - b. No existe un informe técnico que justifique el uso de un porcentaje (25%) de material reciclado en botellas para uso en bebidas. La incorporación de este material PET reciclado debería darse de manera progresiva.
 - c. El proceso de aprobación de resina reciclada debe asegurar la calidad del producto de acuerdo con parámetros de descontaminación, seguridad alimentaria y desempeño. En tal sentido, debe considerarse plazos graduales y progresivos, considerando que estamos hablando de bebidas de consumo humano, cuya inocuidad debe ser 100% asegurada para resguardar la salud de la población.
 - d. Existe en el Perú un único proveedor de resina reciclada. No se ha realizado un estudio de demanda de la industria que determine si el volumen de resina reciclada, de acuerdo con el porcentaje exigido, puede ser cubierto según su capacidad instalada y en el plazo señalado. La capacidad instalada actual de la única planta en Perú para producir material reciclado PET grado alimenticio es insuficiente para atender el 100% de la demanda que se generaría si la regulación fuera aprobada.
 - e. No se ha tenido en cuenta a los pequeños productores de la industria, sus estructuras de costos y esquemas de inversión. Si bien se mencionan los estándares de uso de material reciclado en botellas PET de los grandes productores de la industria, la regulación debe poder incluir a todos. Exigir una composición del 25% de material reciclado en un plazo corto podría generar que muchos productores salgan del mercado, pues no podrán adecuarse en dicho plazo.
 - f. Los Proyectos no toman en cuenta las nuevas tecnologías en el mercado embotellador. Por ejemplo, el proceso "hot fill". Este es un proceso térmico que hace posible la conservación de los productos sin el uso de aditivos conservantes (con la intención de tener un impacto positivo en la salud de las personas), pero que no permite incorporar material reciclado en las botellas. El proceso "hot fill" hace referencia al llenado de botellas con productos líquidos a temperaturas superiores a 85° para pasteurizar la bebida, la





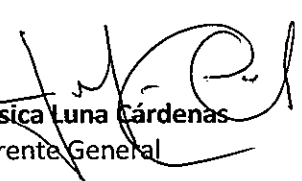
botella y la tapa. Una vez que las botellas son llenadas y taponadas se someten a un enfriamiento controlado para llevar el producto a temperatura ambiente. Este proceso de embotellamiento requiere de una resina especial para soportar los cambios de temperatura y presión. Características con las que no cuenta la resina reciclada en nuestro país y que, por tanto, no podría ser utilizada para estos procesos. En otros países, como Ecuador, los recipientes "hot fill" fueron exceptuados de la normativa.

- g. No se ha considerado tampoco la situación de los envases retornables, que ya de por sí son de conveniencia medioambiental. Cualquier norma que implique una modificación en su fabricación y/o en su rotulado debe aplicar para los envases que se vayan a fabricar desde la exigencia de la normativa y no para los que ya existen en el mercado, tomando en cuenta que cada envase retornable de PET tiene una vida útil de aproximadamente 15 vueltas.

Por lo expuesto anteriormente, si bien no dudamos de la buena disposición de las propuestas legislativas, y con cuya intención nos encontramos igualmente comprometidos, consideramos que la regulación debe consignar un mayor plazo de adecuación progresivo para las empresas formales que deberán alinearse a las nuevas reglas de juego. De igual manera, dadas las características de nuestra economía, se debe contar con una herramienta efectiva para la gestión de residuos sólidos y enfocar un mayor esfuerzo en mejorar la educación y concientización sobre la problemática del uso excesivo del plástico en la sociedad, así como campañas de reciclaje a un mayor nivel. Por ello, sugerimos a usted considerar los comentarios arriba mencionados que podrían mejorar la eficiencia de la normativa.

Agradeciendo su gentil atención, nos valemos de la ocasión para reiterarle nuestra especial consideración y estima personal.

Atentamente,


Jessica Luna Cárdenas
Gerente General

